



Poder Judicial de la Nación

**LEGAJO DE APELACIÓN DE V.A.B. EN AUTOS: “B., V. A. SOBRE SOBRE INFRACCIÓN ART. 303 DEL C.P.”**

CPE 861/2020/2/CA1. Orden N° 34.660. Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7, Secretaria N° 13. Sala “A”.

Buenos Aires, de diciembre de 2024.

**VISTOS:**

El recurso de apelación interpuesto a fs. 418/424 vta. del principal (confr. fs. 48/54 vta. de este incidente) por la defensa de V.A.B. contra el punto dispositivo I de la resolución de fs. 405/415 del mismo expediente (confr. fs. 35/45 del presente legajo), por el que el juzgado “*a quo*” dictó el auto de procesamiento del nombrado, sin prisión preventiva.

La presentación de fs. 64 de este legajo por la que la defensa de V.A.B. informó en los términos del art. 454 del C.P.P.N., ocasión en la que se remitió a los fundamentos expuestos por el recurso de apelación aludido precedentemente.

**Y CONSIDERANDO:**

1º) Que, por la resolución recurrida, en lo que interesa a la presente, el señor juez de la instancia anterior dictó el auto de procesamiento de V.A.B. sin prisión preventiva, por considerarlo autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 303, inc. 1, del Código Penal, por el hecho consistente en “...haber puesto en circulación en el mercado formal la suma de u\$s 90.000, proveniente de un ilícito penal anterior, con la consecuencia posible de que el origen de aquel dinero adquiriera la apariencia de un origen lícito, al haber entregado aquella suma de dinero a su pareja M.A.A.M.; quien luego lo afectó [con fecha 30/12/2019] a la adquisición del inmueble sito en la calle Juramento N° 5040/42, primer piso, departamento ‘b’, de esta ciudad...y de la cochera sita en la planta baja de aquel domicilio...”. Aquella suma “...utilizada por M.A.A.M. para concretar la operación de compra de los inmuebles mencionados, fue producto del robo perpetrado por B. y otras personas, el día 09 de noviembre



de 2019, en el domicilio de la calle Virrey Del Pino N° 3946, de esta ciudad, ocasión en la que el nombrado se apropió ilegalmente de, entre otros bienes, considerables sumas de dinero...”.

2º) Que, de los agravios invocados por la parte recurrente, corresponde tratar en primer lugar aquéllos vinculados con la invalidez que le atribuye a la resolución impugnada, ya que la admisión eventual de aquellos agravios y la descalificación consecuente del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido, tornaría innecesario examinar los restantes cuestionamientos relacionados con el fondo de la decisión recurrida.

3º) Que, por el recurso de apelación en examen, la defensa de V .A.B. se agravió de la resolución impugnada por considerar que por aquélla “...el Juez inferior realiza una arbitraria valoración de los elementos aportados por el imputado al momento de ejercer su derecho de defensa...sin evacuar las citas correspondientes que le permitirían comprobar -más allá de la documentación aportada- lo manifestado por V. B....”.

Al respecto, corresponde expresar que por la normativa legal vigente, los jueces no están obligados, en la etapa de instrucción, a referirse a todos y a cada uno de los elementos de prueba incorporados al legajo, ni a tratar todos los argumentos ofrecidos como descargo por los imputados, ni a disponer la producción de todas las medidas de prueba solicitadas por aquéllos, sino sólo las que se estimen pertinentes a fin de “...comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad (art. 193 del C.P.P.N.)...” (confr. Regs. Nos. 633/01, 981/01, 598/04, 813/10 y 63/12, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 943/2010/25/CA5, res. del 01/07/2020, Reg. Interno N° 177/20 y CPE 1208/2022/30/CA7, res. del 18/10/2023, Reg. Interno N° 477/23, de esta Sala “A”).

Esto es así, pues “...la actividad del juez es técnicamente discrecional, queriéndose significar con ello que, a diferencia de lo que ocurre durante el plenario -el juicio oral-, está concentrada sólo en las disposiciones del instructor...Es que la pertinencia de la prueba, calificándola como necesaria a los fines de la investigación, incumbe sólo al juez (CS Fallos 247:214). Resulta del carácter escasamente contradictorio de esta etapa...” (confr. Reg. N° 136/12; CPE 237/2013/7/RH1, res. del 8/9/2015, Reg. Interno N° 385/15; CPE 1674/2014/1/RH1, res. del 6/6/2016, Reg. Interno N° 266/16; CPE 759/2016/1/RH1, res. del 9/3/2017, Reg. Interno N° 115/2017 y CPE 27/2019/10/RH1, res. del 14/3/19, Reg. Interno

Fecha de firma: 05/12/2024

Alta en sistema: 06/12/2024

Firmado por: ANABELLA E. POLEDORE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CAROLINA ROBIGLIO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA



#38139230#437914637#20241205090411956



## Poder Judicial de la Nación

130/19, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 1002/2016/43/2/RH64, res. del 29/09/2022, Reg. Interno N° 463/22 de esta Sala “A”).

Por lo demás, se advierte que, el magistrado interviniente en la instancia previa por el pronunciamiento impugnado expresó los motivos por los cuales consideró que la medida probatoria peticionada por V.A.B. en la oportunidad de prestar la declaración indagatoria “...no resulta de utilidad a los fines de profundizar la presente investigación...” (confr. considerandos 21° y 22° de la resolución recurrida).

4°) Que, en línea con lo que se viene expresando por el considerando que antecede, corresponde recordar que “...el Código Procesal Penal de la Nación adoptó, para el proceso penal, el sistema probatorio de la ‘sana crítica’, por el cual no se limita la facultad judicial para establecer la forma de probar los hechos investigados, ni se predetermina el valor de los elementos reunidos, valor que, como principio general, sólo debe ajustarse a las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia común (confr. Francisco J. D’ALBORA, ‘Código Procesal Penal de la Nación’, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1.999, pág. 384; José I. CAFFERATA NORES, ‘La prueba en el proceso penal’, 2da. ed., Bs. As., Depalma, pág. 23; Regs. N° 581/02, 843/01, 1083/03, 1151/04 y 166/05, entre otros, de esta Sala ‘B’)...” (confr. Regs. Nos. 16/09 y 296/12 de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 516/2023/15/CA2, res. del 29/12/2023, Reg. Interno N° 603/23, de esta Sala “A”).

5°) Que, las diferencias de criterio que tengan las partes con relación a la fuerza o al alcance probatorio de los elementos incorporados a la causa y a la idoneidad de éstos para generar la convicción suficiente que se exige para el dictado del auto de procesamiento (art. 306 del C.P.P.N.) son materia de la discusión central del trámite del recurso de apelación, pero no implican la invalidez de la resolución recurrida, en los casos como el que se presenta en el “sub lite”, en cual por el auto impugnado se cumple con los requisitos de motivación que se prescriben por la ley procesal vigente (confr., entre muchos otros, Regs. Nos. 923/03, 602/15 y 72/16, de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 843/2020/2/CA1, res. del 10/11/2022, Reg. Interno N° 560/22 y CPE 1195/2018/3/CA1, res. del 11/04/2024, Reg. Interno N° 139/24, de esta Sala “A”).

A lo expresado precedentemente corresponde agregar, que si “...por el desarrollo posterior de la instrucción se favoreciera la situación de



*los imputados, por la ley de rito se prevé la posibilidad de revocar de oficio, o de reformar, el auto de procesamiento (art. 311 del C.P.P.N.) ...” (confr. Regs. Nos. 414/01, 387/04, 443/11, CPE 1012/2013/6/CA2, res. del 15/7/15, Reg. Interno N° 369/16 y CPE 769/2009/6/CA1, res. del 19/5/17, Reg. Interno N° 313/17, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 943/2010/25/CA5, res. del 01/07/2020, Reg. Interno N° 177/20 y CPE 1208/2022/30/CA7, res. del 18/10/2023, Reg. Interno N° 477/23 de esta Sala “A”).*

En consecuencia, en las condiciones verificadas en los autos principales, no se advierte en el caso afectación al derecho de defensa en juicio, como así tampoco que se haya provocado un perjuicio real, actual y concreto para aquella parte, que eventualmente afecte la validez del pronunciamiento impugnado, por lo tanto, los cuestionamientos que la defensa efectúa en el sentido referido no pueden tener una recepción favorable.

6º) Que, con relación a la cuestión de fondo traída a conocimiento de esta Sala, corresponde señalar que el señor juez a cargo del tribunal de la instancia anterior sostuvo, a partir de los elementos de prueba obrantes en los autos principales, que “...la contemporaneidad existente entre el robo en el cual habría participado V.A.B. (09/11/2019), y la posterior e inmediata adquisición del inmueble sito en la calle Juramento N° 5040/42, primer piso, departamento ‘b’ de esta ciudad y de la cochera sita en la planta baja de aquel domicilio (30/12/2019), y teniendo en consideración que el patrimonio del nombrado, ni el de su pareja (M.A.A.M.) era suficiente para contar con la suma de u\$s 90.000 en ese momento; se permite inferir que la compra de esos inmuebles (bienes subrogados) habría sido abonada con el dinero apropiado en la ocasión del robo mencionado (bien originario)...”.

Al respecto, destacó que “...ese dinero espurio adquirió la apariencia de un origen lícito en la ocasión de completarse la declaración jurada del origen de los fondos, en la cual se detallaron las distintas circunstancias que habrían permitido la obtención de esos u\$s 90.000, por parte de la adquirente...Sin embargo, los elementos de prueba incorporados en autos, dan cuenta de que el contenido de esa declaración jurada es falsa y la confección de la misma resultó ser una pantalla para ocultar el verdadero origen ilícito de ese dinero y brindarle, de esa manera una apariencia de licitud...”.

Agregó, que “...teniendo en consideración que el departamento ~~adquirido con ese dinero de origen ilícito (bien originario)~~ es el lugar de

Fecha de firma: 06/12/2024

Alta en sistema: 06/12/2024

Firmado por: ANABELLA E. POLEDORE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CAROLINA ROBIGLIO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA



#38139230#437914637#20241205090411956



## Poder Judicial de la Nación

*residencia de B. y su familia, la circunstancia de que los inmuebles mencionados precedentemente (bienes subrogados) se encuentren formalmente inscriptos a nombre de M.A.A.M., pareja de B., no impide sostener que esa operación inmobiliaria fue planificada por el nombrado para ocultar la proveniencia ilícita de ese dinero y brindarle de esa manera, una apariencia legal...”.*

7º) Que, con respecto al delito previsto por el art. 303, inc. 1º, del Código Penal (según texto de la ley 26.683, vigente al momento del hecho), que sanciona a “...*el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito...*”, por la doctrina se ha expresado: “...*lo prohibido en nuestra formulación legal es la realización de una maniobra ‘cosmética’ que permita, como consecuencia posible, que el autor pueda mostrar a la sociedad que obtuvo su dinero ejerciendo una actividad lícita, cuando en verdad esto no fue así. Esa apariencia de legalidad es lo que se pretende evitar, y que el tipo penal diga que basta con que ésa haya sido la ‘consecuencia posible’ de la acción ‘da al intérprete la idea, a nivel de tipo objetivo, de que si la maniobra de lavado es descubierta, de todos modos el fracaso objetivo del maquillaje no impide sancionar siempre que la maniobra haya tenido una dosis de idoneidad’...*” (el resaltado corresponde a la presente, confr. CÓRDOBA, Fernando J., “*Delito de lavado de dinero*”, 1ra. edición, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2015, pág. 87, con cita de TROVATO, Gustavo Fabián, “*La conducta prohibida en el delito de blanqueo de capitales y la imputación penal de las personas jurídicas por lavado*”, publicado en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal N° 10/2014, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2014, págs. 2112/2122, y CPE 898/2020/24/CA6, res. del 14/07/2021, Reg. Interno N° 456/21, de la Sala “B” de esta Cámara).

**La señora juez de cámara doctora Carolina L.I. ROBIGLIO agregó a lo expresado de manera conjunta:**

8º) Cabe recordar que por el tipo penal previsto por el art. 303, inc. 1º, del Código Penal, se ven alcanzadas las conductas de poner en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de aquellos bienes o los que los hayan



reemplazado, adquieran la apariencia de un origen lícito, por lo que no se requiere que los bienes presuntamente provenientes de un ilícito penal adquieran efectivamente la cualidad de un origen lícito, sino que basta con que aquello sea una “consecuencia posible” de los actos examinados.

La puesta en circulación en el mercado de aquella clase de dinero, puede ser llevada a cabo mediante sucesivos actos de diferente naturaleza, incluso realizados a lo largo de un tiempo, es decir, la legitimación de activos de origen ilícito puede ser un proceso que se vaya desarrollando por etapas, mediante la realización de diferentes operaciones tendientes a dotar de apariencia de licitud a aquellos bienes, acumulándose los efectos de todas las etapas (confr. voto de la suscripta en CPE 1360/2013/11/CA2, res. del 29/08/2022, Reg. Interno N° 383/22, de la Sala “B” de esta Cámara), la primera de las cuales podría estar constituida por la adquisición de un inmueble.

Sin embargo, por los elementos de juicio incorporados hasta el momento al legajo principal, no se advierte en el caso el desarrollo de un despliegue de operaciones posteriores a la comisión del delito precedente, más que la utilización del producto de ese ilícito en la compra del departamento mencionado, para destinar a la vivienda familiar de quien se encuentra imputado por la comisión presunta de aquel delito anterior.

9º) Se observa que la resolución apelada apoya la motivación de lo que dispone, en la acción de suscribir la declaración jurada presuntamente mendaz acerca del origen del dinero utilizado para pagar la propiedad, al sostener que “...ese dinero espurio adquirió la apariencia de un origen lícito en la ocasión de completarse la declaración jurada del origen de los fondos...”, no obstante que esa acción no fue realizada por quien fue procesado por la resolución impugnada, V.A.B. sino por M.A.A.M., quien se encuentra procesada por ese accionar, que, en su caso, ha sido encuadrado con el art. 277, inc. 3, apartado “b”, en función del inc. 1, apartado “c” del mismo artículo, del Código Penal.

10º) En cuanto a la intervención de V.A.B. en el hecho reseñado, debe tenerse presente que en los casos de la utilización del provecho de un ilícito por personas a quienes se atribuye responsabilidad en ese delito anterior, se ha interpretado que la tipicidad dependerá de la circunstancia de que al gasto de aquel dinero se hubiera adicionado algún procedimiento idóneo para simular o alterar la titularidad real o el origen del mismo, requisito que en este caso no se verificaría por el momento (confr., en lo





## Poder Judicial de la Nación

pertinente y aplicable, el voto de la suscripta en CPE 1360/2013/11/CA2, res. del 29/08/2022, Reg. Interno N° 383/22, de la Sala “B” de esta Cámara).

En efecto, de acuerdo a lo que surge de los elementos obrantes en los autos principales, una parte del producido de la actividad ilícita previa (la suma de dinero obtenida a partir del robo que se habría perpetrado el día 09/11/2019), habría sido aplicada, menos de dos meses después, directamente a la adquisición de bienes trazables como son un inmueble y una cochera, a nombre de la pareja del imputado V.A.B. M.A.A.M., para destinar a la vivienda de aquéllos, junto al hijo de ambos.

Las circunstancias descriptas precedentemente, aunadas a la falta de solvencia económica suficiente de V.A.B. y de M.A.A.M. para afrontar la compra de ese inmueble, acreditadas en la causa principal (confr. considerando 2°, apartados 8° y 9° del pronunciamiento recurrido), controvierte la estimación que el juzgado “*a quo*” efectuó con respecto a que el “...dinero espurio adquirió la apariencia de un origen lícito en la ocasión de completarse la declaración jurada del origen de los fondos...”, pues, en el particular contexto del caso en examen, la suscripción por la pareja del imputado, de una declaración jurada del origen de los fondos presuntamente falaz, en ocasión de llevarse a cabo una operación inmobiliaria, en los términos de la Resolución UIF 21/2011 y cc., insertando manifestaciones que fueron controvertidas con sencillas medidas de prueba, no permite al menos a esta altura afirmar que lo actuado haya excedido el gasto del provecho obtenido del ilícito anterior, y por lo tanto, que pudiera tratarse de alguna de las maniobras reseñadas por los considerandos precedentes o que pudiera tener la consecuencia posible de que se trate de un accionar atribuible a B. con entidad para dar al dinero con el que se pagó el inmueble, la apariencia de un origen lícito, por lo que el auto de procesamiento impugnado no se ve suficientemente sustentado.

11°) Que, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, resulta aplicable lo establecido por este Tribunal por pronunciamientos anteriores en cuanto a que “...la recepción, el reparto y la utilización de los montos que serían el producido de la actividad ilícita desarrollada no se ajustaría a las descripciones típicas del delito de legitimación de activos...”, como también que “...[l]as maniobras en procura de la legitimación de activos, conforme la estructura típica otorgada al delito (arts. 303, inc. 1, 304 y 306 del C.P.), no puede ser confundida con un acto de agotamiento del delito precedente, como el que en principio representa alcanzar la finalidad ~~de aprovechar lo obtenido espuriamente...~~” (confr. CPE 321/2016/21/CA3,





res. del 05/12/2017, Reg. Interno N° 864/17 y CPE 898/2020/24/CA6, res. del 14/07/2021, Reg. Interno N° 456/21, de la Sala “B” de esta Cámara).

12º) Que, las razones expresadas por el considerando 7º del voto conjunto y los considerandos 8º a 11º de este voto, permiten sostener en el caso en examen, que no se han acreditado suficientemente los elementos objetivos requeridos para la configuración del delito de legitimación de activos de origen ilícito, por lo que corresponde concluir que el auto de procesamiento dictado por el tribunal de la instancia anterior respecto de V.A .B. debe ser revocado.

**El señor juez de cámara doctor Roberto Enrique HORNOS agregó a lo expresado de manera conjunta:**

8º) Que, contrariamente a lo sostenido por la defensa de V.A.B. los elementos de prueba incorporados a los autos principales constituyen un cuadro probatorio idóneo y suficiente para sustentar, con el alcance exigido por el art. 306 del C.P.P.N., la estimación provisoria efectuada por la resolución apelada acerca de la concurrencia, en el comportamiento que el nombrado, en principio, llevó a cabo, de los elementos objetivos y subjetivos correspondientes al tipo penal por el cual el juzgado “a quo” asignó significación jurídica al hecho descripto por el considerando 1º del voto conjunto de la presente.

9º) Que, los agravios invocados por la parte recurrente se centran en el intento de demostrar que el dinero utilizado para la adquisición del inmueble y de la cochera, sitos en la calle Juramento N° 5040/42 de esta ciudad, proviene de fuentes lícitas, sin embargo aquella parte no desarrolló argumentos suficientes para controvertir la valoración probatoria efectuada por el pronunciamiento impugnado y para rebatir los fundamentos que el señor juez “a quo” expresó por los considerandos 15º a 17º de la decisión recurrida, por los cuales indicó una serie de circunstancias que controvierten, con el grado de probabilidad requerido para este estado del proceso, lo alegado por el recurrente en aquel sentido.

En efecto, los elementos de prueba enumerados por los considerandos 2º y 4º del pronunciamiento recurrido, valorados en forma integral y de conformidad con las reglas de la sana crítica, al menos por el momento, brindan sustento suficiente a la estimación provisional del tribunal de la instancia anterior por cuanto sostuvo que “...si se tiene en cuenta...la







## Poder Judicial de la Nación

*contemporaneidad existente entre el robo en el cual habría participado V.A.B. (09/11/2019), y la posterior e inmediata adquisición del inmueble...y la cochera...(30/12/2019), y teniendo en consideración que el patrimonio del nombrado, ni el de su pareja (M.A.A.M.) era suficiente para contar con la suma de u\$s 90.000 en ese momento; se permite inferir que la compra de esos inmuebles (bienes subrogados) habría sido abonada con el dinero apropiado en la ocasión del robo mencionado (bien originario)...”.*

**10º)** Que, tampoco puede prosperar el cuestionamiento que efectúa la defensa de V.A.B. en cuanto a que por la resolución recurrida el señor juez interviniente en la instancia previa “...*afirma de forma contundente que B. utiliz[ó] un supuesto dinero obtenido por un hecho delictivo ocurrido el 09 de noviembre de 2019, en el domicilio de la calle Virrey Del Pino N° 3946, de esta ciudad, cuando de las constancias de ese expediente, todavía no se ha podido probar y justificar la existencia cierta del exorbitante dinero que...detallan como sustraído...en ese proceso...*”.

Al respecto, corresponde indicar que por las constancias agregadas a la causa principal se desprende que en el expediente CCC 86519/2019, que tramitó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, se dictó el auto de procesamiento respecto de V.A.B. “...*por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda...*”, hecho que habría ocurrido el día 09/11/2019 en el inmueble sito en la calle Virrey del Pino 3946, de esta ciudad, por el que aquél -junto a otras personas- se habría apoderado ilegítimamente de la suma de U\$S 510.000, entre otros efectos (confr. fs. 71/98 del principal).

Por el pronunciamiento de fecha 09/10/2020, dictado en el expediente aludido, se declaró clausurada la instrucción respecto del nombrado B., en orden al suceso referido anteriormente, y se dispuso la elevación a juicio de la causa con relación a aquél, la cual quedó radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 (confr. fs. 100/104 vta. y 435 del principal).

**11º)** Que, con relación al agravio mencionado por el considerando anterior, cabe recordar que el “...[h]echo antecedente de lavado de dinero sólo puede ser un delito. Pero no hace falta que el hecho anterior del cual provienen los bienes haya sido un hecho culpable y punible, sino que basta que haya sido típico y antijurídico, es decir, un hecho ilícito...es el origen ilícito de los bienes lo que convierte en reprochable su adquisición o



recepción; no la culpabilidad y punibilidad del autor del ilícito previo...para que no quedara ninguna duda al respecto la ley 26.683 [B.O. 21/06/11] reemplazó la expresión ‘delito’ por la de ‘ilícito penal’ cerrando así la posibilidad de cualquier interpretación alternativa por la que se pretendiera exigir algo más que la tipicidad y la antijuricidad del hecho precedente...”. Es decir, “...[l]a condena por lavado requiere la prueba de la existencia de un hecho ilícito del cual provienen los bienes. Pero hay que recordar que ese hecho no es el objeto del proceso, de modo que su existencia no precisa ser probada con precisión y el detalle que sí sería necesario si fuese el objeto del juzgamiento...” (confr., CÓRDOBA, Fernando J., ob. cit., págs. 135, 137 y 148).

En el mismo sentido, este Tribunal ha expresado: “...[respecto del] agravio [...] vinculado con la necesidad de la existencia de una sentencia condenatoria por el delito precedente al lavado de activos, corresponde expresar que no es necesario que en la presente causa, que tiene por objeto la investigación y la acreditación de supuestas responsabilidades penales por hechos presuntos de lavado de dinero de origen delictivo, se investiguen el o los delitos previos de los cuales provendría aquel dinero, cuyo origen espurio debe estimarse ‘prima facie’ probado, con el alcance exigido para este momento del proceso, por las circunstancias expresadas por los considerandos anteriores [...] ‘...se requiere...la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico, que permita la exclusión de otros orígenes posibles, no siendo necesaria la superación del plano indiciario, ya que, la demostración plena de esos vínculos nos conduciría a la valoración de la conducta del antecedente...(confr. Sala I, C.F.C.P., ‘Orentrajch, Pedro y otro s/ recurso de casación...’, rta. el 21/3/2006)...’ (confr. CPE 911/2013/2/CA1, res. del 22/9/2015, Reg. Interno N° 428/15, de esta Sala ‘B’)...’ (confr. CPE 612/2014/18/CA1, res. del 17/09/19, Reg. Interno N° 697/19, de esta Sala ‘B’)...” (confr. CPE 1362/2017/14/CA1, res. del 03/11/2021, Reg. Interno N° 697/21 de la Sala “B” de esta Cámara).

12º) Que, por lo tanto, en función de las circunstancias expresadas por los considerandos 9º y 11º del presente voto, la estimación efectuada por la resolución recurrida relativa a que el dinero utilizado para la adquisición de los bienes registrables, sitios en la calle Juramento N° 5040/42 de esta ciudad, habría provenido del suceso ilícito presunto objeto de investigación de la causa CCC 86519/2019, por el cual V.A.B. fue procesado y elevada la causa a juicio oral respecto del nombrado, no resulta irrazonable

y se adecúa a las constancias obrantes actualmente en los autos principales.

Fecha de firma: 05/12/2024

Alta en sistema: 06/12/2024

Firmado por: ANABELLA E. POLEDORE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CAROLINA ROBIGLIO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA



#38139230#437914637#20241205090411956



## Poder Judicial de la Nación

13º) Que, no obstante lo expresado por el considerando que antecede, para la configuración del delito previsto por el art. 303, inc. 1º, del Código Penal, “...[e]n los casos de la compra con dinero de origen ilícito de inmuebles u otros bienes equivalentes, dadas las exigencias de documentación, registración e información a las autoridades que rigen para esas operaciones, la tipicidad depende...de que se haya hecho uso adicionalmente de algún procedimiento idóneo para ocultar la titularidad real y el origen del dinero utilizado, como sucede con el empleo de testaferros o la creación de sociedades comerciales u otras personas jurídicas intermediarias que son usadas como pantalla...” (confr. CÓRDOBA, Fernando J., ob. cit., pág. 127).

14º) Que, los elementos probatorios incorporados a la causa principal, permiten estimar, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso, que la adquisición de los bienes registrables mencionados por el considerando 1º del voto conjunto de la presente, con fondos de origen presuntamente ilícitos, resultaría, por las circunstancias particulares del caso, un tipo de comportamiento que podría considerarse constitutivo del delito de legitimación de activos de origen ilícito por el que se dictó el auto de mérito en examen.

En efecto, las circunstancias de que el inmueble y la cochera, sitos en la calle Juramento N° 5040/42 de esta ciudad, se inscribieran a nombre de M.A.A.M., pareja de V.A.B. que aquélla, pese a que carecería de la capacidad económica para justificar la tenencia de los fondos con los cuales adquirió los bienes en cuestión, habría indicado al momento de efectuar la escritura de aquellos bienes que “...el origen de los fondos en esta compra son lícitos...” y habría confeccionado una declaración jurada, en los términos de la Resolución U.I.F. N° 21/2011, por la que expresó que el dinero con el que realizó la operación en cuestión era lícito y provenía de la “...venta de dos vehículos automotor, pr[é]stamo familiar, ahorros personales...” , lo cual se encontraría en principio desvirtuado por las constancias incorporadas a los autos principales, conforme se expresó por el considerando 9º del presente voto, permiten concluir, con la provisionalidad propia de esta etapa del proceso, que con estas maniobras se habría pretendido no sólo desvincular a V.A.B. de la adquisición de aquellos bienes registrables que aparecerían inscriptos a nombre de la pareja del nombrado, sino también legitimar el origen del dinero en principio de procedencia ilícita utilizado a tal fin.



15º) Que, en las condiciones expresadas por el considerando que antecede, se verificaría en el caso una operación por la cual se “...convirtiere... disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito...”, por lo que la decisión del juzgado “a quo” de dictar el auto de procesamiento respecto de V.A.B. por la comisión presunta del delito de legitimación de activos de origen ilícito, previsto por el art. 303, inc. 1º, del Código Penal (según texto de la ley 26.683, vigente al momento del hecho), descripto por el considerando 1º del voto conjunto de este pronunciamiento, se ajusta a derecho y a las constancias actualmente obrantes en la causa principal y, por lo tanto, debe ser confirmado.

**El Dr. Roberto J. BOICO dijo:**

He sido convocado a dirimir la cuestión suscitada en el incidente de apelación caratulado “B., V. A. sobre infracción art. 303 del C.P” (CPE 861/2020/2/CA1) en trámite ante el fuero Penal Económico.

Al respecto, deseo aclarar que, si bien en dicho legajo no fue cuestionada la competencia de ese fuero para entender en tales actuaciones, dejo a salvo mi postura sobre el tema.

Sentado ello, en lo que interesa a la presente, he sostenido en otras oportunidades que el tipo de lavado de activos, conforme la última redacción exhibida en el artículo 303 del Código Penal, enumera una serie de verbos (acciones) tales como convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo (...), que constituyen posibles alternativas comisivas -no taxativas- de aquello que puede identificarse como el núcleo de lo prohibido: “poner en circulación bienes provenientes de un delito con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de un origen lícito”, independientemente de que el introductor del activo ilícito haya participado del delito precedente. La grilla ejemplificativa se cierra con una mención marginal que atrapa otras posibles modalidades: “o aplicare de cualquier otro modo”. Algo parecido a lo que ocurre con la estafa del artículo 172 Código Penal, donde valerse de nombre supuesto o falsos títulos son ejemplos mediante los cuales se puede engañar a otro para provocar la disposición patrimonial viciada.





## Poder Judicial de la Nación

El delito de lavado no se satisface con la realización de alguno de los actos jurídicos enumerados en la norma (venta, administración, constitución de gravámenes, etc), ni con la mera recepción de bienes derivados del delito previo (dinero, cosas), sino que las alternativas negociales allí expresadas configuran posibles modos de puesta en circulación de bienes (que aquí se requerirá su procedencia ilícita), procurándose así dotarlos (a esos bienes) de apariencia lícita. Es decir, el autor necesita desplegar eventos o estrategias para que esos bienes ilícitos ingresen al tráfico lícito, aunque necesita también ocultar su génesis delictiva. Entonces, el tema no se sacia tan sólo con introducirlos al circuito lícito, sino hacerlo como si fueran de origen lícito, o dicho de modo contrario, ocultando su procedencia ilícita. De eso se trata el lavado de activos. Por caso, la *mera* adquisición de bienes con dineros mal habidos no constituye el delito de lavado, pues así “no se lava nada”. El lavado exige que ese dinero obtenido ilícitamente aparezca, mediante alguna estrategia, como obtenido lícitamente, pues esa es la condición para dotar al insumo (bien) de una calificación (de licitud) de la que antes carecía.

La planificación criminal necesaria en el delito de lavado, de mayor o menor sofisticación y/o complejidad, estará destinada a que los bienes de procedencia ilícita exhiban, a través de un procedimiento de conversión, un aspecto/rostro de licitud; pero no cualquier acción de ocultamiento o disimulación es lo que requiere el tipo. La maniobra típica del lavado consistirá en la utilización de un insumo fáctico o jurídico que camufle lo que de origen es espurio, algo cuyo propósito sea la obtención de una apariencia que, antes de tal estrategia, no detentaba el “bien a camuflar”. Ahora bien, no interesa que esa apariencia finalmente se obtenga, pues lo que el legislador castiga es la maniobra *cuya finalidad* persiga esa apariencia, bastando para la punición un estadio anterior al resultado querido (las maniobras de camuflaje pretenden dar una apariencia lícita a lo que no la tiene, pero no importa si las acciones en tal sentido permitan alcanzar ese resultado). Apréciase que la redacción del tipo dice: “con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”. Si por “consecuencia” entiendo al hecho/acontecimiento que es la resultante o el derivado de otro hecho, y además la ley modaliza a esa resultante con la “posibilidad”, entonces la consecuencia de que los bienes adquieran apariencia lícita constituye una circunstancia que *puede* ocurrir o realizarse. La ley no exige que necesariamente ocurra esa posibilidad. Por tanto, es un delito cuyo aspecto ~~subjetivo trasciende el dolo, lo que se conoce como componente subjetivo~~



distinto del dolo, en versión delito de resultado recortado. Para ser claro: comete el delito quien procura, a través de *medios idóneos*, introducir al circuito económico activos ilícitos dándoles posible apariencia de lícitos. Si lo logra, es otra cuestión.

Sigamos.

Como sostuve antes, la mera compra de una cosa con el producido del delito (quizás dinero) no constituye esa maniobra dotada de idoneidad para disipar la identidad ilícita que contiene ese bien. Ese dinero ilícito no se tornará aparentemente lícito, merced de la celebración de un contrato de compraventa por cuyo resultado se adquiriera la propiedad de una cosa, pues para dotar al solutorio empleado en la compra de una apariencia lícita, habrá que desplegar un comportamiento que haga presuponer una calificación lícita de origen.

Esta necesidad de aplicar un plan de enmascaramiento se agudiza en el denominado autolavado, pues de otro modo la persecución penal no acabaría con el eventual castigo de la conducta criminal por medio de la cual se obtiene la cosa sujeta a introducción, sino que habría un segundo tramo donde lo castigable es aquello que se obtuvo como resultado de un delito que ya se habría castigado, o como bien indica parte de la doctrina, no se puede castigar (nuevamente) un tramo de la conducta que constituye el agotamiento de otra (conducta) calificada como delito. Si fuera así, entonces, habría doble persecución penal constitucionalmente prohibida.

Una interpretación respetuosa del texto constitucional exige, en cualquier modalidad de lavado y con más razón en el autolavado, que esa cosa obtenida por el ilícito ajeno/propio, si es que hay propósito de introducirla al circuito lícito como lo indica la ley penal, se desconecte completamente del mero uso y goce de lo criminalmente obtenido, y se emprenda una acción totalmente distinta y novedosa a la que constituiría la mera tenencia y disfrute de lo ilícitamente obtenido. Disfrutar del provecho económico del delito precedente requiere, para quien procura lavar activos, un acto de integración, una estrategia introductoria al sistema económico a través de un proceso más o menos sofisticado de ocultamiento de la ilicitud de origen. Sin él, e incluso existiendo actos jurídicos adquisitivos o realizativos de bienes contaminados de ilicitud, podría efectivizarse el decomiso de los bienes frutos del delito, y para evitarlo el lavador debe obturar/dificultar la trazabilidad del bien.

De todo lo expuesto, surge que el delito de lavado exigirá: 1) un acto de introducción del activo mal habido (por delito propio o ajeno) al mercado lícito, esto es, ponerlo en circulación; 2) elaborar y emprender una





## Poder Judicial de la Nación

estrategia de ocultamiento del origen ilícito para presentarlo como lícito, dificultando así su trazabilidad. La idoneidad de la estrategia debe juzgarse *a priori*, más allá de que se obtenga ese resultado de tergiversación de la ilicitud (ver mi voto en FSM35283/2015/42/CA4 “Galindo” del 30/09/2021, reg. 50.151; “Ribada” del 24/5/2022, reg. 50.720 entre otros).

Dicho cuanto precede, resulta obvio que la compra del inmueble y la cochera puesta en tela de juicio no reúnen las condiciones examinadas en el tipo del artículo 303 del Código Penal, pues como lo anticipé, la sola circunstancia de haber adquirido bienes registrables no puede extraerse la finalidad de disfrazar la ganancia proveniente de un delito, para su integración al mercado.

Tal adquisición, de manera aislada, no demuestra la intención del encausado de desdibujar la procedencia ilícita del dinero utilizado para tal transacción, más allá de que éstos hayan sido registrados a nombre de la pareja de B., M.A.A.M.. Nótese, que tal como surge de las actuaciones principales, se pudo determinar fácilmente la falta de solvencia económica por parte de los nombrados para la compra de esos inmuebles y aún más, la prueba utilizada para sostener el alegado ocultamiento de éstos por haber procurado su ingreso al circuito formal es justamente, la cual se valoró para procesar a la sindicada M. por el delito de encubrimiento agravado en el fuero ordinario. Ello, me permite concluir que las constancias reunidas hasta aquí no resultan suficientes para demostrar algún tipo de movimiento de bienes en pos de confundir su origen.

Por las razones expresadas, considero que debe ser revocado el procesamiento recurrido, en consonancia con la postura adoptada por mi colega Dra. Carolina Robiglio, dejando así expuesto mi voto.

Por ello, por mayoría, **SE RESUELVE:**

**I. REVOCAR** la resolución recurrida en cuanto fue materia de recurso.

**II. SIN COSTAS** (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 96/2013 de Superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7, Secretaría N° 13.





JUEZ DE CAMARA

JUEZ DE CAMARA

ROBERTO JOSE BOICO  
JUEZ DE CAMARA

ANTE MI:

ANABELLA E. POLEDORE  
SECRETARIA DE CAMARA

